



## ACUERDO DE SALA

### ASUNTO GENERAL

**EXPEDIENTE:** ST-AG-15/2021

**PROMOVENTE:** PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
POR CONDUCTO DE MARTHA  
MUNGUÍA, MUNGUÍA,  
REPRESENTANTE PROPIETARIA  
ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 11  
DEL INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL CON CABECERA EN  
ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO

**AUTORIDAD:** DIRECTORA  
GENERAL DE RECURSOS  
HUMANOS DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS LXIV LEGISLATURA

**MAGISTRADA PONENTE:** MARCELA  
ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

**SECRETARIA:** ADRIANA ARACELY  
ROCHA SALDAÑA

**COLABORÓ:** DANIEL RUIZ GUITIÁN

Toluca de Lerdo, Estado de México; a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

**VISTOS**, para acordar los autos del **Asunto General** citado al rubro, formado con motivo del escrito presentado por el **Partido Revolucionario Institucional**, por conducto de **Martha Montoya Munguía**, quien se ostenta como Representante Propietaria acreditada ante el Consejo Distrital 11, del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en **Ecatepec**, Estado de México, a fin de presentar vía *per saltum* juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para impugnar la falta de respuesta respecto a su solicitud que ingresó por correo electrónico a la Cámara de Diputados; y

### RESULTANDO

**I. Antecedentes.** De los hechos narrados por la accionante en su escrito de impugnación, se advierte lo siguiente:

**1. Solicitud de información.** Martha Montoya Munguía expone que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, solicitó mediante correo electrónico diversa información a la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

#### II. Asunto General

**a. Presentación del escrito.** El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el **Partido Revolucionario Institucional**, por conducto de **Martha Montoya Munguía**, quien se ostenta como Representante Propietaria acreditada ante el Consejo Distrital 11, del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en **Ecatepec**, Estado de México, presentó ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito mediante el

cual manifiesta que la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de diputados de la LXIV Legislatura Federal ha sido omisa porque no se le ha dado respuesta a la solicitud de información que presentó referida en el párrafo anterior.

**b. Integración del juicio y turno a Ponencia.** En esa propia fecha, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional acordó integrar el expediente identificado con la clave **ST-AG-15/2021**<sup>1</sup> y dispuso turnarlo a la Ponencia a su cargo.

**c. Radicación.** Posteriormente, la Magistrada Instructora radicó la demanda del asunto general identificado al rubro.

## CONSIDERANDOS

**PRIMERO. Jurisdicción y competencia.** El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la V Circunscripción plurinominal Federal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, es **formalmente** competente para conocer y resolver este asunto toda vez que se trata de un escrito presentado por una ciudadana que alega la omisión de dar respuesta a su solicitud electrónica relacionada con información solicitada en torno a la candidatura a Diputada Federal por el Distrito 11 de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que se encuentra en el ámbito de jurisdicción en que esta Sala ejerce competencia.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, fracción II, 51, fracción I y 70, primer párrafo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en lo aplicable del contenido de la jurisprudencia **1/2012**, de rubro: "**ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR EXPEDIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO**",<sup>2</sup> de los que se desprende la facultad de este órgano jurisdiccional para resolver lo conducente, a través de esta modalidad de Acuerdo General, así como el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación **8/2020**, por el que se reanuda la resolución de todos los medios de impugnación.

**SEGUNDO. Actuación colegiada.** La materia sobre la que versa la determinación que se emite compete a la Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinomial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria, y no en lo individual, con base en la razón esencial que informa a la jurisprudencia número **11/99** de rubro "**MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,**

<sup>1</sup> Mediante el Acuerdo de Turno se dio el cauce de Asunto General, al estimarse que la omisión combatida no correspondía a la materia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al no impugnarse un derecho político electoral, como lo podría ser votar, ser votada, asociación y afiliación, respectivamente.

<sup>2</sup> Consultable en: <https://www.legobmx/USEapp/tesisjra.aspx?tesis=12012&tipoBusqueda=S&Word=12012>



**SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR**<sup>3</sup>.

La jurisprudencia aludida indica, en síntesis, que cuando se requiera el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso del procedimiento regular, tales como tomar una decisión sobre algún presupuesto procesal, sobre su posible conclusión sin resolver el fondo, ni concluir la sustanciación, entre otras, la resolución queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, por lo que los Magistrados solo pueden formular un proyecto de resolución que será sometido a la decisión plenaria de la Sala Regional.

Lo anterior, debido a que en el presente caso se trata de determinar cuál es el cause que se le debe dar al escrito presentado por **Martha Montoya Munguía** en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional al combatir vía “*per saltum*”, la aducida omisión de la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de darle respuesta a su solicitud que ingresó por correo electrónico el veintisiete de mayo anterior.

En ese contexto, lo que al efecto se determine no constituye un acuerdo de mero trámite, toda vez que trasciende en cuanto al curso que se deba de dar al mencionado escrito; de ahí que se siga la regla referida en la jurisprudencia en cita, a efecto de que sea este órgano jurisdiccional quien, actuando en Pleno, emita la determinación que en derecho proceda.

**TERCERO. Improcedencia de dar trámite al escrito como medio de impugnación competencia de Sala Regional Toluca**

Sala Regional Toluca considera que no ha lugar a dar trámite alguno al escrito presentado por Martha Montoya Munguía, quien se ostenta como representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional acreditada ante el Consejo Distrital 11 del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Ecatepec, Estado de México, al combatir vía “*per saltum*”, la aducida omisión de la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de darle respuesta su solicitud que ingresó por correo electrónico el veintisiete de mayo anterior, ello porque la materia objeto de impugnación escapa a la materia electoral.

Por tal razón, no tiene cabida en alguno de los medios de impugnación o asuntos de su competencia, ya que **no constituye promoción o interposición** de alguno de los juicios o recursos previstos en la legislación electoral, cuya competencia constitucional y legal para conocer y resolver corresponda a cualquiera de las Salas de que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como se expone enseguida.

<sup>3</sup> Consultable en *Justicia Electoral*. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18.

**a. Marco jurídico aplicable**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, párrafo segundo, Base VI, prevé lo siguiente: *“VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.”*

Lo expuesto revela el establecimiento de un sistema de medios de impugnación electoral previsto en los artículos 99, fracciones II y V, de la citada Constitución General de la República; 184, 186, fracciones II y III, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tiene el fin de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en la materia, ya que su propósito es dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.

El Tribunal Electoral, como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 99, fracciones II y V, de la citada Constitución; 184, 186, fracciones II y III, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Su función es resolver las controversias en los procesos electorales, así como tutelar el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas, además de hacer efectivos los principios constitucionales en los actos y resoluciones electorales.

De ese modo, el citado Tribunal Electoral es competente para conocer de los juicios y recursos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los supuestos de procedencia previstos para cada uno de ellos.

Así, para activar la labor jurisdiccional, es indispensable que quien acuda al Tribunal Electoral, efectivamente plantee una situación litigiosa o controversial con motivo de un acto o resolución, cuyos efectos le causen algún tipo de afectación a su esfera de derechos políticos o electorales.

En ese aspecto, es cómo se actualiza la competencia de los órganos jurisdiccionales que integran al Tribunal Electoral, cuando a través de un medio de impugnación se controvierte algún acto o resolución de una autoridad electoral (o partidista) que se considera se aparta del orden jurídico.



En esas condiciones, las facultades de Sala Regional Toluca son esencialmente jurisdiccionales, al estar diseñadas para conocer y resolver los medios de impugnación establecidos en la ley adjetiva electoral nacional, siempre y cuando se cumpla (por regla general) con el principio de definitividad.

#### **b. Caso concreto**

El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Martha Montoya Munguía, quien se ostenta como su representante, en el escrito que dio origen a la integración de este Asunto General, presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, vía “*per saltum*” ante Sala Regional Toluca, expone la falta de respuesta de la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura respecto a su solicitud de información en materia de transparencia y acceso a la información que ingresó por correo electrónico el pasado veintisiete de mayo a la Cámara de Diputados, derivado de que a la fecha de presentación del escrito no había obtenido respuesta, razón por la cual lo presenta.

Del anexo que acompañó a su escrito, se identifica una impresión de una solicitud de información, con un fichero adjunto, y en cuyo escrito que obra en copia se desprende que solicitó respecto a María Eugenia Hernández Pérez, lo siguiente:

Se le informara nombre completo, foto de la cara según su expediente personal, sueldo y/o salario, cargo y/o nombramiento y/o puesto; listas de asistencia y /o registros del sistema biométrico y/o cualquiera forma de registro de asistencia; si tiene o no vehículos asignados a su cargo; si es que tuviere o no vehículos asignados a su cargo le informe cuáles son, así como sus características y el número de placas de circulación de dichos vehículos; si recibe o no algún recurso económico y/o en especie; si es que recibiere algún tipo de recurso le indique la cantidad económica y/o la cantidad en especie especificando la especie; si es que existiere algún tipo de licencia solicitada por la citada ciudadana le informe la fecha de la solicitud; y se le informe si existe licencia para separarse de su cargo, y en su caso, le indique los motivos de separación del cargo por licencia y/ permiso.

Asimismo, solicitó se le informará cuántas personas tiene adscritas María Eugenia Hernández Pérez a su cargo; le informe el salario, puesto y/o cargo de las personas adscritas a su cargo; listas de asistencia y/o registro del sistema biométrico y/o cualquiera forma de registro de asistencia de las personas que tiene adscritas; si recibe o no algún recurso económico y/o en especie de las personas que tiene adscritas; si tienen vehículos asignados.

Además, solicitó se le informaran las bajas y altas administrativa del periodo del primero de enero al veintidós de mayo de este año del

personal que tiene adscrito la citada ciudadana; del personal que tiene adscrito quién solicitó en su caso, baja temporal y/o renuncia definitiva, así como el motivo de su baja o renuncia, y por último, se le informe del personal que tiene adscrito a su cargo, y en su caso, quién solicitó licencia de ausentismo y/o temporal así como el motivo por el cual se le concedió y la fecha si fuera ese el caso del período referido anteriormente.

Tal solicitud, expone, fue motivada porque *“... ha visto en plena luz del día coma (sic) es decir desproporcionadamente la economía utilizaba (sic) por parte de la C. María Eugenia Hernández Pérez, candidata a diputada federal por el distrito 11 de Ecatepec de Morelos por el partido morena ha utilizado excesivamente a simple vista exceso de recursos económicos en lonas eventos trípticos gorras playeras además como materiales de utensilios en eventos como los son sillas, renta de lonas, renta de equipo de sonido, además de publicidad en las diferentes ramas de las telecomunicaciones...”*.

Lo anterior, evidencia que la alegada omisión de ningún modo actualiza la procedencia de alguno de los medios de impugnación regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a virtud de **que no se trata de un acto controvertible a través de los juicios o recursos que ahí se prevén.**

Máxime que el sistema de medios de impugnación en materia electoral de base constitucional y configuración legal se estableció para garantizar la eficacia de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, el cual tiene como finalidad dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 constitucional.

De ese modo, el artículo 99, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, señala que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Carta Magna y según lo disponga la ley, sobre impugnaciones:

- I. En las elecciones federales de diputaciones y senadurías.
- II. Las que se presenten sobre la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
- III. Las de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las anteriores, que violen normas constitucionales o legales.
- IV. Las de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.
- V. Las de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de las y los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.



**VI.** De igual manera, para conocer de los conflictos o diferencias laborales: **a)** entre el Tribunal y sus servidores, así como **b)** entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores.

**VII.** La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; y

**VIII.** Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento, por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan.

En correlación con el contenido del dispositivo inserto, en los artículos 186 y 189, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se instrumentan las previsiones constitucionales mencionadas, en tanto que en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de Medios, se establece que el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por:

**a)** El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

**b)** El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

**c)** El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;

**d)** El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos;

**e)** El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, y

**f)** El recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Completan el sistema de justicia electoral referido, el denominado juicio electoral de creación jurisdiccional por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que motivaron que en los *Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, aprobados el doce de noviembre de dos mil catorce, se estableciera el citado medio impugnativo **cuando se plantease una controversia en materia electoral** que no actualice la procedibilidad de alguno de los juicios o recursos previstos expresamente en la normativa electoral federal.

De ese modo, el juicio electoral se previó como el medio de impugnación para garantizar la tutela judicial efectiva con el propósito

de conocer los casos distintos de la promoción de juicios o recursos electorales expresamente regulados a nivel federal, en el que se tenga que resolver una controversia que se relacione exclusivamente con la materia electoral.

En el tenor apuntado, se advierte que de la normativa constitucional, legal y reglamentaria precisada, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación expresamente previstos en los que se controviertan **actos de autoridades de la materia**, así como de los **partidos políticos** que resulten violatorios de derechos de índole político-electoral, lo cual implica que el Tribunal Electoral asuma el conocimiento del asunto **sólo** cuando se presente una controversia o litigio entre partes en **materia electoral**, determinadas por un acto o resolución cierto, real, y directo o inminente, impugnable mediante las vías expresamente previstas en las disposiciones jurídicas invocadas.

En ese sentido, si el Partido Revolucionario Institucional por conducto de María Eugenia Hernández Pérez quien se ostenta como su representante, pretende que este órgano jurisdiccional conozca de la omisión planteada, a efecto de que se solicite a la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados la respuesta afirmativa a su solicitud de información, conforme a lo previsto en el Marco Normativo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pone de relieve que tal mandamiento escapa a las atribuciones de este órgano jurisdiccional federal para observar y hacer cumplir tal normativa.

En ese tenor, se dejan a salvo los derechos de María Eugenia Hernández Pérez para que de considerarlo pertinente, acuda ante la instancia que estime competente a combatir la omisión de repuesta a su solicitud que realizó en forma electrónica a la Cámara de Diputados el pasado veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que alega contraviene el marco normativo y los principios que rigen el derecho de acceso a la información.

Ello se estima del modo apuntado, porque ni el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ni cualquiera de los otros medios de impugnación previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ni en el juicio electoral de creación jurisdiccional que encuentran sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o en los Lineamientos Generales emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **son la vía para impugnar** una omisión de acceso a la información de un órgano del Poder Legislativo lo cual escapa a la esfera de competencia de la materia electoral.

Ello, porque aun y cuando la promovente expone, entre otros





actos, que el pasado veintisiete de mayo solicitó vía correo electrónico diversa información a la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados para descartar que la candidata a diputada federal por el Distrito 11 de Ecatepec de Morelos, Estado de México por el partido político MORENA esté utilizando diversos recursos económicos que no estén autorizados por las leyes electorales, lo cierto es, que se trata de la falta de respuesta de una solicitud de información de una Dirección del Poder Legislativo estatal que, al enmarcarse en el ámbito de transparencia, no afecta su esfera de derechos político-electorales de votar, ser votada, afiliación o asociación.

Por tanto, en atención al principio de legalidad que mandata que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido o atribuido, **no es conforme a Derecho dar trámite o reencausar** el escrito del Partido Revolucionario Institucional presentado por conducto de María Eugenia Hernández Pérez quien se ostenta como su representante legal, a alguno de los medios de impugnación o asuntos de la competencia de este Tribunal Electoral.

Por tanto, la pretensión de que Sala Regional Toluca ordené a la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados que le dé respuesta a su solicitud de información es inviable derivado de que como se ha expuesto, ello escapa a la materia electoral, sin que se desconozca que alega la transgresión a su esfera de derechos electorales, porque como se expuso, se trata de la falta de respuesta de una solicitud de información a un órgano del Poder Legislativo.

La conclusión apuntada de ninguna forma desatiende el postulado de impartición de justicia completa, prevista en el artículo 17 Constitucional, ya que da efectividad a la tutela de los derechos de la promovente al dejar a salvo sus derechos para presentar el medio correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa administrativa correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se

#### **ACUERDA:**

**PRIMERO.** Es **improcedente** dar trámite al escrito del Partido Revolucionario Institucional, presentado por conducto de Martha Montoya Munguía, quien se ostenta como su Representante Propietaria acreditada ante el Consejo Distrital 11, del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en **Ecatepec**, Estado de México, como juicio ciudadano.

**SEGUNDO.** Se dejan a salvo los derechos del promovente para que acuda ante la instancia que estime competente a combatir la omisión de respuesta a su solicitud que realizó en forma electrónica a la Directora General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados el pasado veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, conforme a lo previsto

en el marco normativo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**NOTIFÍQUESE, por estrados** a la promovente, y a los demás interesados tanto físicos, como electrónicos, siendo estos últimos consultables en la dirección de internet <https://www.te.gob.mx/ESTRADOS/Home/index?idSala=ST>, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 94 y 95, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hágase del conocimiento público el presente Acuerdo de Sala en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet. y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por **unanimidad** de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA AUTORIZADA MEDIANTE FIRMAS ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS, EL CUAL TIENE PLENA VALIDEZ JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES SEGUNDO Y CUARTO DEL ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 3/2020, POR EL QUE SE IMPLEMENTA LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTE CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.